

¿Financiamiento de OHL, Higa y Odebrecht en la campaña del PRI por la gubernatura del Estado de México?

Investigaciones periodísticas revelan que:



Desde el inicio de la actual legislatura, el Grupo Parlamentario de **morena** ha presentado diversos puntos de acuerdo para denunciar posibles actos de corrupción que involucran a distintos servidores públicos, entre ellos a secretarios de Estado y al propio presidente de la República, al otorgar contratos millonarios o ampliar

concesiones a empresas como OHL, Higa y Odebrecht, sin que haya claridad sobre la legalidad en los procedimientos seguidos para tomar esas determinaciones.

Extractos de la proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, y publicada en la *Gaceta de la Comisión Permanente* el 17 de mayo de 2017.

CONTRATO \$



OHL
Higa
Odebrecht

Respecto a OHL, por ejemplo, se detectó que opera algunas de las siguientes concesiones: Circuito Exterior Mexiquense, Autopista Atizapán-Atlacomulco, Viaducto Bicentenario, Supervía Poetas, Autopista Urbana Norte, Autopista Amozoc-Perote, Libramiento elevado de Puebla, Aeropuerto Internacional de Toluca y Viaducto elevado La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, con una participación que va de 27.5 a 56.1 por ciento y con duraciones que varían entre 30 y 50 años.

En el caso de Higa y las empresas relacionadas con Juan Armando Hinojosa Cantú, el llamado contratista favorito de Enrique Peña Nieto, **morena** solicitó el 13 de abril de 2016 a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la instalación de una comisión con la finalidad de investigar todos los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios, asociación público privada o cualquier contrato análogo que se les hubiera entregado o en el que hayan participado o estuvieran participando dichas empresas con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

En lo que concierne al escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, el 22 de diciembre de 2016 se hizo del conocimiento público el pago de sobornos que realizó a diversos servidores públicos de por lo menos diez países de América Latina, entre ellos México, para obtener millonarios contratos.

En días recientes, **diversos medios de comunicación dieron a conocer la posible intervención de las empre-**

sas OHL, Higa y Odebrecht en las campañas electorales en curso. Apenas el 8 de mayo, en algunos diarios de circulación nacional se publicó el posible vínculo y el *modus operandi* de dichas empresas para el financiamiento de la campaña de Alfredo del Mazo, candidato a la gubernatura del Estado de México por el PRI, que se basa en cuatro líneas de defraudación:

La primera línea de defraudación es en la construcción. Por ejemplo: el Circuito Exterior Mexiquense se otorgó por un costo de 6600 millones de pesos, pero ahora es de 63 200 millones de pesos, es decir, casi diez veces su costo inicial. Este costo fue reconocido por la entidad federativa. En el caso del Viaducto Bicentenario, éste se otorgó por un monto de 3900 millones de pesos, y ahora asciende a 23 400 millones de pesos. Sólo con estas dos concesiones otorgadas a OHL, el Estado de México ha generado una deuda por un monto de casi 90 mil millones de pesos.

La segunda línea de fraude se comete al financiar con estos recursos las campañas del PRI. Esto se logra con esquemas como La Efectiva, que es una tarjeta de débito a través de la cual se depositó dinero a los votantes en la elección de Eruviel Ávila en 2011, o mediante los monederos electrónicos de Monex en los comicios presidenciales de 2012.


Una tercera línea de defraudación tiene que ver con la Bolsa de Valores, donde se falsean los datos financieros de la empresa a fin de inflar los valores de las acciones de OHL.

En la última línea de defraudación participa el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), entidad que ha fungido como garante para que OHL cotice las concesiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Estas operaciones ya han sido descubiertas y fueron motivo de que la Bolsa se pronunciara ante estas operaciones sospechosas. De acuerdo con la información proporcionada por los diarios, en septiembre del año pasado, se detectó en los estados financieros de SAASCAEM la asignación de 1600 millones de pesos, los cuales se reportaron en sus estados de cuenta. Sin embargo, para diciembre estos recursos habían desaparecido sin argumentación alguna.

Ese mecanismo de defraudación, explica Alfredo Figueroa, ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), se ha repetido de manera cíclica y conforme a los tiempos electorales.

Respecto al desvío de recursos para financiar las campañas políticas del PRI, el Grupo Parlamentario de **morena** presentó ya dos puntos de acuerdo. En el primero se denunció el desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en el segundo se evidenció cómo a través de la Universidad Autónoma de

Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México se triangularon recursos públicos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, a través de empresas fantasma que estaban ligadas a la organización criminal del cartel de Juárez. Por **medio de acciones de triangulación de ambas universidades y licitaciones amañadas y a modo, se entregaron recursos federales a empresas fantasma**, que a su vez fueron transferidos a empresas como Grupo Comercializador Cónclave y Prodasa, entre otras, para financiar los monederos electrónicos Monex, con los que el PRI operó la campaña de Peña Nieto en 2012.

Como queda expuesto en las consideraciones anteriores, **morena**, desde el inicio de sus trabajos en esta legislatura, ha presentado diversas proposiciones con punto de acuerdo con la finalidad de denunciar posibles actos de corrupción y desvío de recursos, así como la impunidad con la que han operado dependencias de la Administración Pública que han sido utilizadas para triangular recursos o en su caso otorgar contratos millonarios a empresas como OHL, Higa y Odebrecht, las cuales hoy sabemos que posiblemente están siendo utilizadas para financiar las campañas del PRI. 

OHL: Circuito Exterior Mexiquense





La tarjeta Salario Rosa: compra de votos para Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México

El Estado de México se encuentra sumido en la inseguridad provocada por la delincuencia y el crimen organizado sin freno; se trata de una entidad donde los feminicidios se han incrementado de forma alarmante sin que el gobierno tome medidas para detenerlos. Las decisiones políticas de la élite que lo gobierna —el Grupo Atacomulco— han propiciado exclusión y pobreza, mientras la corrupción y la impunidad han sido el distintivo de los gobiernos priistas.

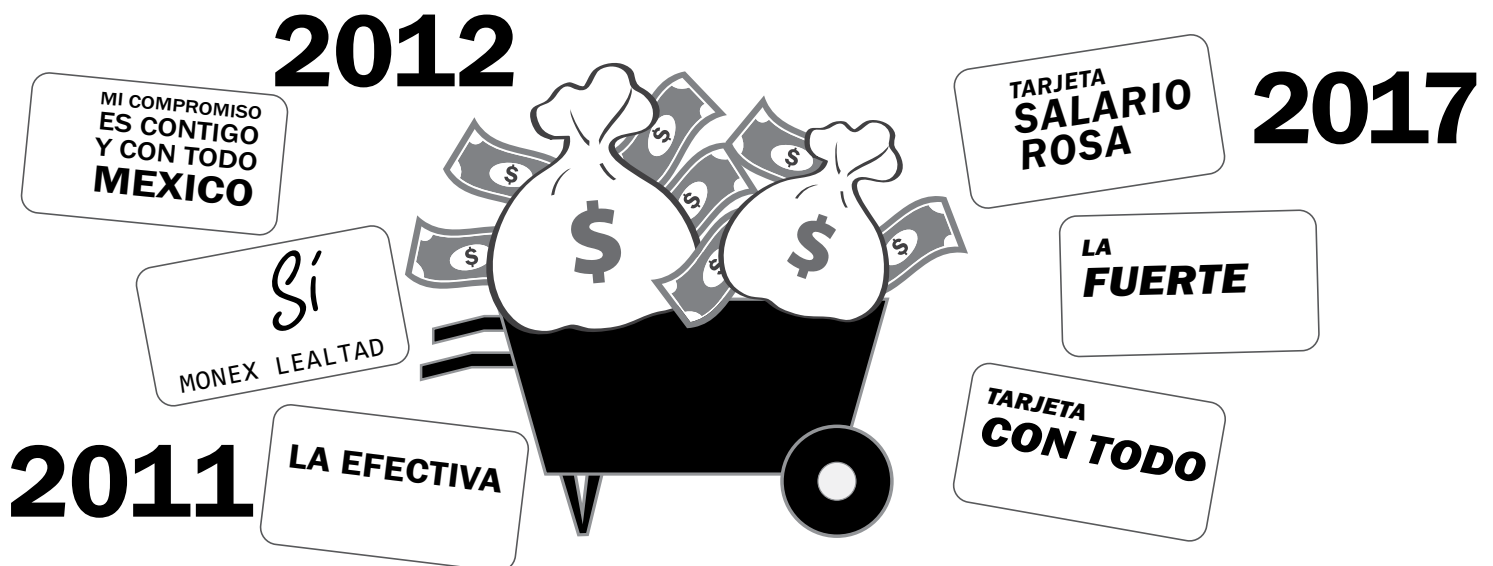
En materia de delitos electorales, es proverbial el *modus operandi* que utiliza el PRI para evadir la fiscalización de recursos que llegan a sus candidatos y con los que realiza la compra del voto, como ocurrió en 2012 con las tarjetas Monex y como está sucediendo ahora en la campaña de Alfredo del Mazo, su abanderado en el Estado de México, con las tarjetas Con Todo, La Fuerte y Salario Rosa.

El uso de **dinero de procedencia dudosa introducido a los circuitos financieros, que se dispersa en miles de**

tarjetas utilizadas para comprar o inducir el voto, es parte de la estrategia que ha diseñado el PRI para retener o arrebatar cargos de elección popular, como lo pretende ahora en el Estado de México, frente a su derrota inminente.

El Salario Rosa es una propuesta de campaña del candidato priista, quien aclara que se trata de un apoyo económico a las amas de casa como reconocimiento por el trabajo que realizan en su hogar y con su familia. Sin embargo, la operación de compra de votos a través de la tarjeta Salario Rosa ha sido denunciada ya por **morena** ante las instituciones electorales que están obligadas a actuar de inmediato, para evitar que acciones ilegales como ésta enturbien la elección.

Extractos de la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, turnada a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017, de la Comisión Permanente, y publicada en la *Gaceta* de la Comisión Permanente el 24 de mayo de 2017.



Ejemplos de activismo focalizado de secretarios de Estado

Secretario de Educación Cuautitlán Izcalli

Anunció la entrega de recursos para el equipamiento de 1570 escuelas en zonas de alta y muy alta marginación

Secretario de Medio Ambiente Metepec

Entregó recursos del Programa de Empleo Temporal por casi 83 millones de pesos



Secretario de Salud Ecatepec

Caravanas de salud para la aplicación de vacunas, mediciones de glucosa y presión arterial, unidades para mastografía, odontología y afiliaciones al Seguro Popular

Secretario de Comunicaciones y Transportes Texcoco

Obras por más de 580 millones de pesos y anuncio de inversiones por 40 mil millones de pesos en diversos proyectos

Los promotores priistas han prometido hacer depósitos de entre 2400 y 3000 pesos en las tarjetas rosas. Así, **el Salario Rosa no es un programa institucional, sino una estrategia para comprar votos.**

Para el Grupo Parlamentario de **morena**, es evidente que el PRI está comprando el voto con el reparto de plásticos, asunto que debe investigar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). La utilización de estas tarjetas, además, abre un margen de sospecha en el sentido de que a este candidato lo puedan estar financiando con dinero de procedencia ilícita.

La operación de compra del voto a través de la tarjeta Salario Rosa forma parte de una estrategia más grande y de dimensiones hasta ahora no vistas, para detener el triunfo de **morena** en el Estado de México. Según nuestras evidencias, se ha montado una operación de Estado para impedir la derrota del PRI, en la que participan funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal, en abierta contravención a la ley.

El aparato de gobierno se ha puesto, ilegalmente, al servicio de Alfredo del Mazo. Así lo consignó la prensa y lo confirman pruebas en poder de **morena**. La estra-

tegia para que el PRI *gane* la elección del Estado de México fue planeada por la Presidencia de la República y en ella participan 24 dependencias federales. Cada una de las secretarías involucradas fue designada responsable de una región para la organización de las Ferias Integrales de Servicios en la entidad. De acuerdo con nuestra fuente, desde la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, a cargo de Francisco Guzmán Ortiz, se acordó otorgar en la entidad consultas, asesorías y servicios públicos, más el reparto de despensas de Diconsa y tarjetas del Gobierno del Estado de México para disposición de dinero, como La Efectiva.

En concordancia con lo denunciado por **morena**, la prensa nacional ha evidenciado el activismo de secretarios, subsecretarios y directores en varias zonas de la entidad y cómo sus giras de trabajo revelan el interés especial por algunas demarcaciones. Bastan algunos ejemplos.

Las fuentes consultadas reconocieron que el secretario de Salud, José Narro, es el responsable del municipio de Ecatepec; y la presencia del secretario ha estado acompañada de caravanas de salud para la aplicación de vacunas, mediciones de glucosa y presión arterial,

unidades para mastografía, odontología y afiliaciones al Seguro Popular.

En tanto, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, es el responsable del municipio de Metepec. Entre septiembre y diciembre del año pasado, Pacchiano realizó tres actos en el municipio para la entrega de recursos del Programa de Empleo Temporal por casi 83 millones de pesos.


En el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fuentes del PRI lo señalaron como responsable del municipio de Texcoco. Además de priorizar la promoción de obras en territorio mexiquense, con un costo de más de 580 millones de pesos, el titular de la SCT ha anunciado inversiones por 40 mil millones de pesos en diversos proyectos que incluyen la zona de Texcoco.

También, según fuentes del tricolor, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, es el responsable del municipio de Cuautitlán Izcalli. El funcionario ha anunciado la entrega de recursos al Estado de México para el equipa-

miento de 1570 escuelas en zonas de alta y muy alta marginación.

Y la lista sigue...

En otro documento hecho público por **morena** se definen estrategias de guerra sucia en su contra o la abierta promoción de la abstención por parte del PRI para dañar a la candidata Delfina Gómez, puntera en las encuestas. Las estrategias consisten en advertir a la población sobre los riesgos de un gobierno de **morena**, promover la abstención en los municipios en los que Alfredo del Mazo está debajo de Delfina Gómez en las preferencias electorales y realizar llamadas telefónicas falsas, de madrugada, para desactivar el voto.

Por lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe pronunciarse, con objeto de que las autoridades electorales tomen las medidas necesarias para que se respete la libertad del voto, así como los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda del Estado de México. 

Guerra sucia contra **Delfina Gómez**

Promoción de abstencionismo

Llamadas telefónicas en la madrugada

Presentación de **morena**
como un peligro

Desvío de recursos públicos por la delegación de la Sedesol en Veracruz destinados a campañas electorales

El Grupo Parlamentario de **morena** ha solicitado en distintos momentos que la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncien contra el desvío de recursos públicos para favorecer a partidos y candidatos durante las campañas electorales, perpetrado por funcionarios federales y locales.

Un asunto que lleva varios años ventilándose y que no ha tenido una resolución satisfactoria de las autoridades encargadas de investigar, perseguir y castigar los ilícitos es el desvío de 800 millones de pesos a manos de ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal adscritos a la delegación de Veracruz, para destinarlos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

En abril de 2013, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional en funciones, Gustavo Madero, dio a conocer las grabaciones de unas reuniones en las que, supuestamente, se evidencia la estrategia del PRI para comprar votos con recursos públicos y programas sociales. Ante ello, el PAN interpuso una denuncia en contra del gobernador de la entidad, Javier Duarte, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y otros 57 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, la cual ya estaba siendo investigada por la PGR, encabezada en su momento por el priista Jesús Murillo Karam.

Ante los hechos mencionados, el 18 de abril de 2013, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció la destitución de seis funcionarios de la dependencia y la suspensión de uno, acusados de utilizar recursos públicos para favorecer al PRI en los procesos locales.

El 27 de abril de 2015, dos años después, el senador Alejandro Encinas denunció ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, un presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a programas sociales en Veracruz. Encinas apuntó que el desvío podría ascender a 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el senador detalló que **existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de**

un partido político; los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de Sedesol para fines ajenos a la política social, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización correspondientes. Además, este presunto desvío de los recursos es distinto a los reportados en febrero pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, correspondientes a la Cuenta Pública de 2013.

Recordó también cómo en 2013, el PAN difundió conversaciones telefónicas de funcionarios de Sedesol en Veracruz, que acordaban utilizar los recursos de la dependencia para beneficiar al PRI en las elecciones locales de ese año, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme, y 65 y más.

De acuerdo con la información recibida por el senador, de los 8 millones de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios. También se documentaba el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de 1512 pesos, y que en total sumaban 302 400 pesos. Asimismo, se denunciaba la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques, sustracción de cobros y la falsificación de facturas.

Finalmente, se mostraba el registro de **más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron** y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos.

Como lo había publicado el sitio de Aristegui Noticias en 2013, el PAN reveló una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, que operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo esto lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional, que los calificó como “ladrones electorales”.

Resumen de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Norma Rocío Nahle García, turnada a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017, de la Comisión Permanente, y publicada en la *Gaceta* de la Comisión Permanente el 24 de mayo de 2017.

L@s diputad@s federales de **morena** **exigimos procesos** **electorales limpios**


El 20 de mayo de 2015, el diputado Juan Bueno Torio, de Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República investigaran el destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 y 2014 del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa 3 x 1 para Migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la delegación de Sedesol en el estado de Veracruz.

Como se puede deducir, el desfalco de los recursos del estado de Veracruz probablemente se ha destinado al enriquecimiento ilícito de los servidores públicos implicados, así como a las campañas electorales.

El 5 de febrero de 2016, Alejandro Wong Ramos, en su carácter de ciudadano del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, interpuso denuncia electoral en contra de Víctor Rodríguez Gallegos ante el Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. En ésta se expuso que la finalidad de denunciar a Víctor Rodríguez Gallegos era que se le negara el registro como precandidato a diputado uninominal o por mayoría relativa en tanto que éste se desempeñó como subdelegado administrativo de la Delegación de Sedesol en Veracruz hasta mediados de abril de año 2015, y durante el tiempo que estuvo desempeñando este cargo se vio involucrado, según diversos medios periodísticos, en una serie de señalamientos e imputaciones

por desvío de recursos federales. Se le involucra con desvíos de recursos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, en donde funcionarios de Sedesol cobraban de forma fraudulenta este beneficio, porque ese dinero se requería para ser usado en campañas políticas.

En la misma denuncia se sostiene que **estos funcionarios localizaban obras ya terminadas y se dedicaban a armar documentalmente los expedientes en el escritorio, sin hacer las obras**, específicamente en el Programa 3 x 1 para Migrantes, de Sedesol. Se denuncian también malos manejos con los recursos para gestores voluntarios, quienes, no obstante que la delegación de Sedesol en Veracruz recibió 7 millones de pesos para ellos, no se les entregó dinero alguno. Lo mismo sucedió con el Programa de Empleo Temporal: más de 60 por ciento del presupuesto fue robado por funcionarios de Sedesol en Veracruz.

En conclusión, en vista de que el pronunciamiento de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2015 no fue respondido adecuadamente por las autoridades involucradas y porque las posibles faltas administrativas y los probables delitos cometidos por los ex funcionarios citados permanecen impunes, **morena** propone que la Comisión Permanente insista en conocer la situación que guarda el caso y pida la intervención del actual secretario de Desarrollo Social para evitar que hechos como los denunciados se repitan. 



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA



morena en la Cámara de Diputados, publicación mensual del Grupo Parlamentario de **morena** en la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LXIII Legislatura. Responsable editorial, Patricia Elena Aceves Pastrana. Coordinador de producción, Walter A. Gloria. Correo electrónico: dcd.morena@gmail.com

Mesa de Coordinación del Grupo Parlamentario: Norma Rocío Nalhe García, coordinadora general; Virgilio Dante Caballero Pedraza, vicecoordinador; Patricia Elena Aceves Pastrana, coordinadora de Procesos Parlamentarios

Av. Congreso de la Unión núm. 66, edificio B, primer piso, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, C. P. 15969, Ciudad de México

www.diputadosmorena.org.mx

 [diputadosmorena](https://www.facebook.com/diputadosmorena)

 [@GPMorena63](https://twitter.com/GPMorena63)

 www.youtube.com/channel/UCwvCO_4r-Sth7UNJQ0rA1hQ